

José Errejón

Encrucijadas de la situación política

Superadas las tres primeras oleadas de la pandemia, la recuperación económica, tanto en el ámbito global como en España, parecía haber adquirido buen ritmo en sus tasas de crecimiento del PIB, del empleo y de la inversión (esta última impulsada por la promesa de los fondos para la reconstrucción UE), pero las fuertes subidas de los precios de las materias primas energéticas y su repercusión en el incremento de la tasa de inflación en ascenso a lo largo del año, los desabastecimientos que ya afectan a las principales industrias y la vuelta de la burbuja inmobiliaria, esta vez en China, representan amenazas nada desdeñables de caída en alguna modalidad de inflación con estancamiento que podría afectar muy severamente a la economía española.

Difícil esperar avances significativos en una coyuntura que cada vez más analistas califican de estanflación y en un contexto global de acrecentados riesgos climáticos, energéticos y bélicos. El orden mundial vigente, lo llamemos como lo llamemos, se encuentra en una situación de extrema gravedad tras la Gran Recesión del 2008-2010 y la derivada de la pandemia de la que aún no se puede decir que hayamos salido. Y, lo más importante, sin que se perciban atisbos de alternativa alguna.

En España, las previsiones de crecimiento para los próximos años son discutidas (y discutibles) por el FMI y por el Banco de España, especialmente por lo que se refiere a los ingresos previstos y por los efectos- que ya se dejan sentir- del encarecimiento de los precios de la energía en empresas y hogares. Ello podría suponer dificultades en la recuperación económica en la que el Gobierno tiene depositadas sus esperanzas para terminar la legislatura y afrontar las elecciones generales con alguna posibilidad de mantenerse.

El diseño del proyecto para la recuperación no deja de ofrecer dudas acerca de sus efectos sobre las condiciones de vida de los sectores populares de los que se espera el principal apoyo a un gobierno de izquierda. Los principales beneficiarios de la deseada recuperación-ya se ha dicho- serían los sectores económicos dominantes, cuyo beneficio se espera se "derrame" sobre el resto de los sectores sociales, de los que a su vez se espera sean capaces de mantener los niveles de demanda agregada suficiente para la realización de los beneficios de los sectores dominantes. A ese objeto se instrumentan las subidas de los sueldos de los funcionarios y las clases pasivas, las pensiones y el salario mínimo.

El gobierno de coalición ha dado algunos tímidos pasos para revertir parcialmente algunos efectos de las socialmente injustas políticas del PP pero sin haber conseguido siquiera tocar el marco general instaurado por sus políticas de ajuste y consolidación fiscal. A pesar de esa timidez, las grandes corporaciones de la energía y el negocio inmobiliario parecen haber emprendido una campaña de hostilidad y presiones dirigidas a obligar a la rectificación de medidas como las restricciones a los beneficios extraordinarios obtenidos gracias al injusto sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico mayorista o las destinadas a controlar el aumento del precio de los alquileres de viviendas.

Poco importa que unos y otros sean beneficiarios principales de los fondos del NGEU. El simple anuncio de las medidas sobre el mercado eléctrico provocaron la amenaza del Foro Nuclear (del que forman parte las principales compañías del oligopolio energético) de parar las nucleares y, más tarde, de dejar de ofertar en la subasta horaria del sistema electricidad producida por eólicas y fotovoltaicas, con el fin de provocar un fuerte aumento en el precio horario por la entrada en casación de las centrales de ciclo combinado.

No es aventurado decir que los poderes económicos se han colocado en situación de disputar el poder efectivo al gobierno legítimo elegido por el electorado. Y que, del lado de los sectores populares, no es previsible movilización social que pudiera contrarrestar tan sediciosa ofensiva de la oligarquía económica. Eso descarga en la actividad política la mayor responsabilidad en la defensa de los derechos e intereses de estos actores populares. Pero, es obvio decirlo, la izquierda, las ideas de izquierda no están en una fase de ascenso como lo estuvieron en la pasada década; el *gobierno más progresista de la historia* no se formó aupado sobre una oleada de movilizaciones sino en su reflujo.

En la sociedad española se percibe, en efecto, un viento inequívocamente reaccionario

que está llegando a discutir conquistas en el terreno de los derechos civiles que parecían consolidadas en el cuadro ciudadano de valores.

El PP, en un trance de radicalización para no perder apoyos electorales por su derecha en favor de VOX, no duda en proclamar la proximidad de la quiebra de la economía española para acelerar lo que piensa que puede ser el desgaste del gobierno de coalición.

Una derecha muy belicosa -incluso en aspectos en los que era de esperar "visión de Estado"- que pretende denunciar el pacto de 1978 en sus aspectos más "democratizantes" como los derechos sociales y la estructura territorial del Estado sancionada en el título VIII, así como buena parte del patrimonio de derechos civiles (derecho al aborto, matrimonio homosexual, etc.) conseguidos en estos cuarenta años de régimen constitucional.

Son rasgos peculiares de la derecha española, que nunca ha dejado de añorar los privilegios disfrutados durante cuatro décadas de dictadura de derechas. Pero se inscriben en una tendencia global en la que, amenazados por la crisis los privilegios de los que disfrutaban los sectores sociales a los que representa, se postula un nuevo "acuerdo social" aun más injusto en su favor y con perjuicio para los sectores populares. Cuando teme que venga una época de adversidades, la oligarquía española prepara un arsenal de políticas para apretar el cinturón de las condiciones de vida de los de abajo.

La crisis del régimen no se ha cerrado pero ha entrado en una fase en la que puede pudrirse y tomar derivas claramente regresivas. Para ser más claro, lo que amenaza hoy la continuidad del régimen no es la posibilidad de un proceso democrático constituyente sino la de un *proceso destituyente reaccionario*. Entiéndase bien, no se sostiene que este proceso reaccionario deba desembocar "necesariamente" en un cambio constitucional, se trataría más bien de un proceso de vaciamiento de los conteni-

dos más democratizantes de la Constitución de 1978 además, claro está, del reforzamiento de los rasgos más destacados de la herencia franquista que la misma contiene, junto con aquellos adheridos del ordenamiento jurídico neoliberal de la UE. A ello contribuye, de un lado, la agresividad de los sectores dominantes en contra del mantenimiento de los derechos sociales esenciales; y, de otro, la pasividad de la mayoría de los sectores subalternos, tras la decepción con el momento potencialmente impugatorio de Podemos.

Las esperanzas de recuperación y mejora de las posiciones logradas por las clases media y trabajadora, después de la regresión de la segunda década del siglo, se han visto frustradas por un conjunto de factores de diversa índole entre los que cabe destacar la continuidad en la caída de la rentabilidad de las inversiones a nivel global, lo que realimenta la tendencia a la financiarización, la dificultad de mantener un nivel adecuado de prestaciones sociales por parte de los Estados y, en fin, la necesidad para el capitalismo de contraer la rentas del trabajo para recuperar expectativas de ganancias.

En estas condiciones y pérdidas las esperanzas de recortar siquiera un poco del trozo de tarta de los poderosos, todos los sectores sociales, para mantener el suyo, optan por ver cómo recortar el trozo de los que están más abajo. Se generaliza así un movimiento de insolidaridad que aumenta los niveles de resentimiento y aislamiento y favorece la configuración en los imaginarios sociales de chivos expiatorios, grupos sociales a los que culpar de las adversidades que sufre el propio. Todo ello cubierto por la revalorización de la comunidad nacional imaginaria como lazo de unión de los perdedores con los ganadores.

El ciclo histórico de potencialidad impugatoria se ha cerrado. Los efectos de la pandemia, acumulados a los de la crisis de 2010, sin que se haya modificado, ni siquiera parcialmente, el equilibrio entre la oligarquía y la sociedad trabajadora y los

sectores populares, ha generado un malestar de fondo y una cierta desafección hacia la política y la democracia, con el consiguiente emerger de tendencias políticas claramente antidemocráticas representadas por Vox y el PP.

La pujante *estadolatría* que al calor de la lucha contra los efectos de la pandemia se desarrolla en países como el nuestro tiene como función desarrollar esta comunidad imaginaria, aún cuando los beneficiarios de las acciones de los Estados vayan a ser, como ya se ha dicho, las grandes corporaciones. Aún así, conviene no engañarse, el neoliberalismo no ha desaparecido, sus efectos en la conformación de las antropologías dominantes en nuestras sociedades son el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de las patologías sociales arriba señaladas y para evitar que las intervenciones estatales pudieran derivar en reequilibrios de renta en favor de los más débiles.

A los mandos del gobierno que pilota el proyecto de reconstrucción, transformación y resiliencia (PRTR), con recursos de un volumen desconocido hasta la fecha, se encuentra un PSOE en trance de recuperación, todavía parcial, del papel vertebrador de la sociedad española desempeñado desde 1978. El recobrado papel del Estado para salir de la recesión ha permitido, en efecto, recuperar el prestigio de las medidas intervencionistas aplicadas en Europa durante los 30 dorados (1945-1975) pero sin el soporte que les prestaba un fuerte movimiento obrero decidido a exigir al menos una participación en los frutos de la recuperación económica y el bienestar. Así, la defensa del retorno de lo público se traduce en un estatismo sin la menor garantía del tan anhelado reequilibrio de fuerzas por parte de los sectores populares, condenados a la pasividad y a desempeñar un papel de legitimadores en las urnas de las políticas estatales.

Que, con todo, estas políticas merezcan el refrendo en las urnas de la sociedad trabajadora es buena prueba del nivel de desmovilización alcanzado por los sectores subal-

ternos tras la decepción con Podemos de la pasada década. Es esta una condición que favorece la recuperación del papel del PSOE como gestor estatal de un *capitalismo compasivo*, con los límites que las clases dominantes fijan a este ejercicio "de compasión" con cargo a los presupuestos públicos.

Alguna otra condición contribuye a esta recuperación del PSOE, y no es de las menores el que la ofensiva reaccionaria desatada por PP y VOX, en ese contexto de desmovilización y pasividad de las capas subalternas, le hace aparecer ante estas capas como la última y más eficaz defensa de los derechos sociales, en detrimento electoral de formaciones más a su izquierda. La celebración del 40º Congreso del PSOE parece que viene a sancionar y realzar esta tendencia, simbólicamente expresada en la recuperación del término "socialdemocracia" en lugar de "progresista", así como en el abrazo Sánchez/González. El mensaje político enviado puede ser analizado así:

- la socialdemocracia es la única izquierda útil para defender lo social en un contexto de mejora del capitalismo en las dimensiones ecológica y social;

- el marco político para lograrlo no puede ser otro que el régimen de 1978 robustecido por la incorporación verde y feminista y por una renovación del pacto territorial con nuevos actores socios en Euzakdi y Cataluña (EHBildu y ERC, respectivamente); fuera del marco de 1978 solo hay lugar para la reacción y el involucionismo;

- la izquierda (= socialdemocracia) en España no es ni puede ser otra que el PSOE, la incorporación de la temática verde y feminista, si quiere servir para algo, tiene que encuadrarse en el PSOE;

- no obstante, lo que queda a la izquierda del PSOE debería agruparse lo más posible para constituirse en complemento (la "muleta") necesario por si el PSOE lo necesitara para seguir gobernando y evitar el acceso al poder de la derecha reaccionaria PP/VOX.

En síntesis: superado el "susto" de la pasa-

da década, se propone una versión del régimen de 1978 renovada en los aspectos señalados y abandonando cualquier veleidad de ampliación y profundización de los derechos ciudadanos y de la democracia. Sánchez legitima así su negativa al acuerdo con Podemos en 2016, reconciliándose con ese alma socialista que, con González a la cabeza, denostaba la presencia de Podemos en el Gobierno, una vez que estos sectores del PSOE han comprobado la inocuidad de tal presencia. Pero nadie puede llamarse a engaño, la renovación del régimen tiene por límites que su estructura institucional sea la constituida por los dos grandes partidos, el PSOE y el PP; el acuerdo ente ambos para la renovación del TC, el tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de datos así lo revela; la incorporación del candidato de UP al TC no debería inducir a error: los resortes institucionales más importantes estarán, como siempre, en manos de los partidos "pata negra" del régimen.

Este axioma es tan fuerte que al PSOE ni siquiera le ha importado haber dejado fuera del acuerdo el CGPJ ni que se incorporen al TC reaccionarios militantes y ya recusados por afinidad con el PP como Espejel: lo esencial es dejar el Estado profundo a salvo de la incorporación de intrusos de fuera del régimen. La incorporación de los nuevos actores del régimen, sobre todo por su izquierda, deberá esperar a que prueben su fidelidad a la continuidad de las instituciones de 1978, renunciando a expandir o profundizar sus contenidos democráticos y sociales. Y para distinguir lo principal de lo secundario, ahí está la resolución de la presidenta del Congreso inhabilitando al diputado canario de UP por las presiones de los sectores más conservadores del poder judicial. Que el TC haya declarado inconstitucional el impuesto municipal de plusvalía, abriendo un agujero en las ya de por sí exhaustas finanzas locales, viene a corroborar esta disposición a la disputa en la que parece comprometida la mayoría conservadora del Poder Judicial.

Es a la luz de este diseño estratégico -que Sánchez ha subrayado al recordar a Yolanda Díaz que es miembro de su gobierno, que es esta condición su principal activo- que debe analizarse la operación de agrupamiento "más allá de los partidos" de los que se hacen eco los medios de comunicación estos días.

Con el arropo mediático del que goza, tal parece que la plataforma de Yolanda pueda salir adelante. Los posibles efectos y consecuencias se mencionan a continuación. Las políticas de izquierda volverán a estar dominadas por una orientación redistributiva en la deseada perspectiva de un nuevo ciclo de acumulación ("crecimiento económico") capitalista, con el añadido legitimador del Pacto Verde, concebido en realidad como el motor del nuevo ciclo de acumulación capitalista. Esta redistribución, en todo caso, no podrá venir del reequilibrio en la capacidad contractual de los trabajadores a la que Calviño ya ha fijado sus límites, sino por las necesidades del capital de expandir la demanda para la realización de la plusvalía.

Se consolidará el régimen de 1978, como "el único marco viable para la izquierda y la democracia", mediante el uso de la izquierda a la izquierda del PSOE como complemento cuando este lo necesite para formar "gobiernos progresistas" con los límites antes señalados y sin perjuicio del control del "Estado profundo" por el PP y el PSOE. A esta tarea de ensanchamiento del régimen eventualmente podría concurrir incluso partidos soberanistas como ERC y EH Bildu.

Se clausura, una vez más, la posibilidad de emergencia de una formación que haga de la defensa de los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales su cometido principal. La captura por el gran capital del Pacto Verde asfixiará las potencialidades de cambio ético y cultural que comporta la crítica ecologista para la civilización capitalista. "Renovables sí, pero no así" gritaban los manifestantes hace unos días en la Puerta del Sol para rechazar esta apropiación

que bastardea lo que pudiera ser una contribución al necesario cambio civilizatorio".

La historia de nuestro país, superado el acontecimiento 15M y sus efectos, volvería a la senda de exclusión y subalternidad de las mayorías sociales por donde ha discurrecido también en las cuatro últimas décadas. Y los partidos de izquierda volverían a confundir la suerte de la sociedad trabajadora con la suerte de los partidos que pretenden representarla, cerrando la posibilidad histórica de definición de una senda de protagonismo propio y directo de esa sociedad.

La *ventana de oportunidad* se abriría ahora para los estratos más poderosos del país, domesticadas las energías impugnatorias de esa parte de la sociedad española que en 2011 proclamó "lo llaman democracia y no lo es". Como en 1977, la razón de la política se volvería a imponer sobre las aspiraciones de igualdad y justicia de aquella parte y el tiempo volvería a ese discurrir vacío del trabajo asalariado y del consumo alienante para los "afortunados", de la exclusión y de la pobreza para los excedentes, de la administración de la vida por los aparatos del Estado y las corporaciones.

Así que resulta irrelevante que las izquierdas políticas confluyan o no, que se agrupe "todo lo que hay a la izquierda del PSOE"; lo importante es que se produzcan encuentros en el seno de la sociedad de cuantos se afanan en la construcción cotidiana de sociabilidades alternativas al infierno de soledad y aislamiento al que parecen abocadas las sociedades de nuestro tiempo. La devastación sufrida en el tejido social y, por qué no decirlo, en la propia conformación antropológica de las personas, exige aplicarse de forma urgente a esta tarea, sin la cual cualquier operación política institucional quedará condenada a la irrelevancia.

El capitalismo agota su repertorio y demuestra su incapacidad para atender las más elementales necesidades básicas de nuestra especie. Las sociedades, devastadas por la colonización de la vida social por el

imperio de la mercancía, se convierten en masas de solitarios e indiferentes, incapaces de encontrar en los demás la razón de ser "como especie" que nos ha distinguido desde nuestra aparición como tal. La política de izquierdas, presa como está de la lógica de la mercancía y el crecimiento, solo intenta sobrevivir en un entorno socio-cultural cada vez más adverso.

Si no se recupera alguna forma de vida social, aún con todas sus limitaciones y carencias, ese hueco existencial será cubierto por esa "sociabilidad del odio y la sumisión" en la que desembocan las experiencias fascistas. Los colectivos sociales y lo que queda de las izquierdas políticas debieran reflexionar sobre esto y aportar su contribución a esta urgente e imprescindible tarea de "hacer sociedad", renunciando a cualquier forma de dirigismo e instrumentalización electoral de estos empeños. Las elecciones constituyen, sin duda, una forma de participación social en el gobierno de la cosa pública pero ni es la única ni, desde luego, constituye garantía suficiente para frenar la oleada de odio y violencia que se avecina y, menos aun, para contener la marcha imparable del capitalismo a la barbarie y la sumisión.

Por suerte, esta tarea no tiene que empezar de cero; aunque no tenga la repercusión mediática de la política institucional, desde múltiples lugares en la sociedad surgen iniciativas para defender derechos y para asumir responsabilidades que los sindicatos y las instituciones estatales "han ido dejando caer", casi siempre en manos del negocio privado. Y no se trata, hoy, de la mera reivindicación de lo público, sino de la reapropiación del común para la satisfacción de las necesidades. Los sindicatos de barrio de Hortaleza, Carabanchel o Moratalaz en Madrid, los sindicatos de inquilinos extendidos sobre todo en las grandes ciudades donde el precio de los alquileres desborda con mucho la capacidad adquisitiva de un salario medio, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad trabajando en cooperación con el movimiento vecinal,

la Red de Solidaridad Popular, sin olvidar la intervención en barrios y pueblos de algunos sindicatos anarcosindicalistas, son solo algunos ejemplos de esta modalidad de *sindicalismo social* de disputas concretas a la lógica del capital en la vida cotidiana. Entendiendo por sindicalismo social, ya desde las luchas de los setenta del pasado siglo, la extensión del antagonismo de la fábrica al conjunto de la sociedad, con una atención especial a lo que en terminología marxiana se conoce por dimensiones de la reproducción social